

# Una amenaza estratégica

**El robo de infraestructura eléctrica en el norte va más allá del componente delictual, ya es un problema que revela una falla estructural del Estado.**

**L**o que hasta hace unos años parecía un problema aislado se ha transformado en una amenaza sistemática: el robo de infraestructura eléctrica en Chile –y especialmente en el Norte Grande– ha alcanzado niveles alarmantes. Las cifras hablan por sí solas: entre 2021 y 2023 se registraron más de 200 robos a líneas de transmisión y subestaciones, con pérdidas que superan los dos millones de dólares. Pero lo más grave es la aceleración del fenómeno: solo en el primer trimestre de 2025, ya se contabilizan 40 incidentes, con un daño patrimonial cercano al millón de dólares.

La Región de Antofagasta, pese a representar solo el 10% de los delitos registrados este año, concentra el 25% del costo asociado. ¿Por qué? Porque aquí no se trata simplemente de cables robados, sino de ataques a infraestructura crítica, incluyendo torres derribadas y saqueo sistemático de subestaciones. La comuna de Mejillones se ha convertido en un epicentro de estos delitos, y la situación comienza a ser insostenible.

**La carga de enfrentar estos delitos no puede seguir recayendo exclusivamente en las empresas, pues son costos traspasados.**

Pero más allá del componente delictual, el problema revela una falla estructural en la respuesta del Estado. Tal como advirtió el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, la carga de enfrentar estos delitos no puede seguir recayendo exclusivamente en las empresas privadas, que han debido invertir en reposición, seguridad y monitoreo, asumiendo costos que no les corresponden.

La situación exige un cambio de enfoque urgente. El robo de infraestructura eléctrica no es un delito común: es un ataque directo al corazón productivo del país. Y mientras no se entienda así, los delincuentes seguirán actuando con la impunidad que hoy los protege.